Imprimir

Aunque en ocasiones se elaboran proyectos excelentes que consiguen objetivos indispensables, el dilatado paso del tiempo l0s ha hecho desaparecer de la memoria colectiva. Convendría que saliesen de nuevo a la luz porque son magníficos ejemplos a seguir en el presente. Es el caso del «Manifiesto[1] de AVIAT[2]», presentado hace 42 años[3] en la sede del Centro Excursionista de Valencia[4].
Dicho «Manifiesto» iba dirigido «A los valencianos de buena voluntad» y presentaba un fuerte componente idealista, idiosincrático en sus autores y esperable en un país que hacía escasamente 3 años que creía haber salido de una siniestra dictadura de cuarenta años. Evidentemente, si no consiguió todos los objetivos planteados no solo se debió a una dictadura nunca del todo superada, sino también a los tenebrosos estorbos que el neoliberalismo —que estaba arraigando con tanta fuerza por aquel entonces— le puso. Así lo han explicado Naomi Klein[5] y otros estudiosos. El futuro nos ha situado lamentablemente en unas coordenadas de la realidad muy distintas de las esperadas.

No obstante, volvamos a aquel grupo de valencianos entusiastas que lucharon por su medio ambiente al mismo tiempo que otros activistas del resto del planeta lo hacían por el propio.

Una de sus primeras actuaciones consistió en denunciar a uno de los últimos alcaldes fascistas de Valencia, Adolfo Rincón de Arellano, por haber «vendido» la Dehesa de el Saler[6] a especuladores inmobiliarios. La Ley les dio la razón cuando presentaron una demanda judicial en defensa de la integridad del territorio, de manera que el suelo les fue devuelto a sus legítimos propietarios: los habitantes de la ciudad. Asimismo, denunciaron los bombardeos en las Islas Columbretes[7].

Los autores del «Manifiesto» evidenciaban así que la imagen del País Valenciano[8] era de una total desolación a causa de las políticas neoliberales implantadas en el territorio, como ocurría por cierto en el resto del litoral español.

En primer lugar, centraban su recriminación en el medio ambiente: la pérdida de espacios naturales; la privatización de zonas de uso público; la destroza de las costas a causa de la

construcción de urbanizaciones salvajes; la grave contaminación de playas, ríos y aguas subterráneas; la pérdida de las mejores tierras de cultivo; la alteración del equilibrio ecológico por una industria químico-agraria que esclavizaba al labrador; la progresiva desertización de las comarcas interiores; y, finalmente, la agresión a la agricultura y la salud pública a causa de numerosas instalaciones industriales dañinas.

En segundo lugar, advertían de la progresiva degradación de los centros y barrios históricos de las ciudades. Con posterioridad, el neoliberalismo los ha «recuperados» en calidad de «parques temáticos» al servicio del turismo de masas, como ocurre en otras ciudades del planeta. En el caso particular de Valencia, se destruyeron de forma vandálica valiosos edificios con una finalidad fundamentalmente especulativa y se erigieron barrios populares tan caóticamente que parecían auténticos hormigueros.

Nuestros «protagonistas» ya «funcionaban a pleno rendimiento reivindicativo» en la Valencia de 1978, con una democracia naciente, proclamando que los agentes del modelo económico mundial imperante —el neoliberalismo— habían destrozada la naturaleza, las condiciones de vida habían empeorado y se habían sacrificado calles, barrios, cultivos y paisajes en beneficio de una red de viaria de una utilidad más que dudosa. Es decir, mucho antes del actual caos circulatorio urbano ya hablaban de lo que nos esperaba. En efecto, la opción por el vehículo privado del neoliberalismo era el peor «remedio» para el planeta. En definitiva, nuestros héroes no solo predecían lo que estaba empezando a pasar, sino también lo que nos esperaba.

Asimismo, los autores del «Manifiesto» se posicionaban éticamente ante el desastre al considerar que su denuncia no debía quedar restringida al ámbito de abusos o problemas aislados. En efecto, la situación real consistía en un proceso de agresión generalizada que negaba a la ciudadanía su derecho colectivo a la integridad de la propia tierra y le impedía la posibilidad de desarrollar en ella una vida plena.

Aquella gente de los 1970 explicitaba con meticulosidad que la flora, la fauna, el suelo, el aire, los paisajes, el mar y los edificios bellos eran importantes porque el entorno era

fundamental para el desarrollo de una «calidad de vida» entre la población. Ciertamente se trataba de una visión etnocentrista que no abjuraba del progreso, visto por ellos como una vía de mejora de dicha calidad de vida de los valencianos. Ahora bien, sí que abjuraban del modelo de progreso que orientaba la utilización del territorio hacia la creación de una red de carreteras sobresaturada y la construcción disparatada de urbanizaciones y edificios que lo inutilizaban para cualquier aprovechamiento equilibrado y respetuoso con el medio ambiente.

Igualmente, anunciaban el atentado contra la salud colectiva que suponía y de poner en peligro la provisión alimentaria de una población numerosa y creciente; de expropiarle al pueblo sus posibilidades de comunicación en la calle —«la vida en el ágora», tan arraigada en la cultura mediterránea por su benigna climatología— y de esparcimiento durante su tiempo libre; de convertir a los niños y a las personas de edad en prisioneros de las mal llamadas «residencias protegidas» que engendraban por sus infrahumanas condiciones de vida tensiones psíquicas que predecían a enfermedades mentales graves; y, finalmente, de dejarles a las futuras generaciones valencianas un territorio imposible de reconocer y estimar.

En el apartado siguiente, el «Manifiesto» ponía su dedo acusador en los actores del desaguisado enumerando la irresponsabilidad y mala práctica a sabiendas en que habían incurrido las autoridades y determinados sectores económicos de la Comunidad Valenciana.

Empezaba evidenciando el único modelo de progreso que dichos sectores entendían y de qué forma afectaba y afectaría al país: los que vertían en el Parque Natural de la Albufera, los que construían en zonas verdes o donde debería haberlas y los que vendían «descontaminadores» o «ilusiones de naturaleza» en forma de ambientadores y «moda natural».

A continuación, denunciaba a los agresores procedentes de los ámbitos económico y político fundamentalmente. Empezaba con la incompetencia técnica y la corrupción —emparentadas con la dictadura franco-fascista y el sometimiento de la región a políticas centralistas propias

del Estado desde la instauración de la monarquía borbónica en el siglo XVIII, tan perjudiciales para toda España.

La siguiente evidencia aportada se centraba en los peores infractores, aquellos que ni la joven democracia ni la reestructuración territorial en autonomías habían podido impedir o frenar. No eran muchos, pero sí muy poderosos: industrias y empresas constructoras con capital valenciano que habían potenciado la contaminación y construido de manera especulativa y enloquecedora; la desatención y manipulación de los intereses de los trabajadores del campo; la ideología que cualquier industria de entonces consideraba «adecuada» y útil; la política absurda de promoción de un turismo cortoplacista y especulativo que atentaba contra la propia supervivencia de los auténticos alicientes turísticos que deberían estar vinculados al aprendizaje de la clase trabajadora en su tiempo de ocio[9]; y, finalmente, la sistemática manipulación mental del consumidor por parte de una publicidad omnipresente, coactiva y embaucadora.

En síntesis, el «Manifiesto» parecía un enunciado profético, ya que concluía que las acciones enumeradas eran consecuencia de una barbarie capitalista —«neoliberal» diríamos hoy— que ponía en peligro la supervivencia del planeta en general y de la Comunidad Valenciana en particular por haber desarrollado un modelo especulativo y dependiente del exterior, resultado de una actitud sucursalista, provinciana y egoísta característica de la clase social valenciana dominante.

El «Manifiesto» terminaba con una llamada a la sociedad civil. Lo hacía enumerando aquellos «puntos calientes» de la geografía valenciana que era necesario acometer con prontitud. Serían la raíz que «alimentase» una postura popular cohesionada y constante basada en: movilizaciones en defensa de la Dehesa de el Saler contra la especulación y de La Plana[10] contra la planta de amoníaco, la impopularidad de la central nuclear de Cofrentes[11] o las numerosas manifestaciones en los barrios por un mínimo de zonas verdes[12] y por el derecho a cruzar sin peligro las calles. Buscaban una respuesta popular integrada, puesto que hasta el momento había sido dispersa y, por tanto, ineficaz.

Las exigencias para conseguir una réplica popular eran ambiciosas e innovadoras, ya que exigían la publicitación de todos los planes y proyectos que afectasen a la región y la búsqueda de alternativas a la destrucción. Sugerían, entre otras, la realización de estudios públicos sobre las alternativas de uso de los recursos naturales y económicos de la región acompañados de su evaluación.

No obstante, la evolución de la Comunidad Valenciana —al igual que la de otras comunidades autónomas españolas— ha derivado en una franca desintegración y desahucio natural, económico y social.

---

[1] El «Manifiesto» ha llegado a mis manos gracias al profesor Joan Olmos. Fue firmado por él y por personas de reconocido prestigio y profundo afecto por su país. Desgraciadamente, algunas ya no se encuentran entre nosotros. Quede aquí un recuerdo acerca de ellas por su visión de futuro y defensa decidida y valiente: Vicent Andrés Estellés (poeta), Miquel Gil Corell (profesor de Ecología de la Universidad de Valencia y farmacéutico), Josep Vicent Marqués (sociólogo y profesor de la Universidad de Valencia), Marcial Martínez (presidente de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos), Josep Vicent Mateo (senador independiente), Joan Francesc Mira (antropólogo, traductor y escritor), Joan Olmos (ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y profesor de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia), Just Ramírez (arquitecto), Josep Lluís Ros (urbanista), Ferran Sanchis (presidente del Centro Excursionista de Castellón), Joan Senent (presidente del Centro Excursionista de Valencia) y Trini Simó (profesora de Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia).

[2] Associació Valenciana d'Iniciatives i Accions en Defensa del Territori (*Asociación Valenciana de Iniciativas y Acciones en Defensa del Territorio*).

[3] 21 de abril de 1978.

[4] Entidad desaparecida a causa de la crisis financiera de 2008. Como otros Centros Excursionistas españoles, tuvo un carácter emblemático.

[5] Klein, Naomi (Montreal, Canadá, 1970): periodista, escritora y activista con numerosos estudios e investigaciones acerca del capitalismo y la globalización. Es autora de libros como *La Doctrina del shock.*

[6] Depende del Ayuntamiento de Valencia, pues pertenece al distrito de Poblados del Sur, barrio de la ciudad. Aunque la ley de 1927 por la que dicho ayuntamiento adquirió la Albufera y la Dehesa de el Saler —parajes de elevado valor medioambiental y hoy patrimonio de la humanidad— establecía que el uso de esta último sería de monte, con el boom turístico de los 1960 dicha condición se derogó al aprobarse el Plan General de Ordenación del Monte de la Dehesa. Este Plan preveía la construcción de 15 núcleos de grandes parcelas que incluían hoteles, apartahoteles, poblados costeros, apartamentos, un aeropuerto, un club náutico, un hipódromo, grandes almacenes, restaurantes y mucho más. La construcción comenzó en 1968 y se paralizó en 1974 gracias a la acción de nuestros protagonistas y distintas asociaciones de vecinos de la ciudad. Hoy quedan un hotel y algunas torres y el objetivo es recuperar su estado primitivo.

[7] Las Islas Columbretes son un archipiélago de origen volcánico e importante paraje natural. Están situadas a 35 kilómetros de la costa de Castellón, ciudad de la Comunidad Valenciana. En ellas anidan aves migratorias consideradas especies únicas. En 1978 la revista *Valencia Semanal* ya había denunciado ejercicios de tiro del ejército de los EEUU sobre el archipiélago, lo cual motivó protestas de instituciones castellonenses, entidades, cofradías de pescadores y grupos ecologistas. El Ministerio de Defensa español continuó con los bombardeos hasta 1982. Se tardaron, pues, 4 años en conseguir dicho cese.

[8] Oficialmente su nombre es «Comunidad Valenciana» y el término «País Valenciano» tiene un carácter histórico y cultural. España está estructurada políticamente en regiones con leyes autonómicas o federales propias. La Comunidad Valenciana es una de ellas.

[9] En este punto fueron sumamente clarividentes, ya que no podían sospechar que aparecería una pandemia como la actual, vinculada en parte al tráfico aéreo y marítimo intenso por todo el planeta.

[10] Área costera de Castellón.

[11] Continúa abierta y ha sido foco a lo largo de los años de brotes cancerígenos. La autora de este artículo ya lo indicó en un estudio que realizó para el Departamento de Geografía Humana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia. La lucha por su cierre sigue.

[12] Paradójicamente, la «Vox Populi» denominó a la ciudad de Valencia «tierra de las flores», cuando se caracterizó siempre por la ausencia de zonas verdes en su área metropolitana. Dicha situación cambió cuando llegaron al poder en el consistorio valentino políticos progresistas.

Pepa Úbeda